



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO
j04lctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co
TUNJA – BOYACÁ

FECHA: NUEVE (09) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO No. **2022-00036-00**
ASUNTO: SEGURIDAD SOCIAL
DEMANDANTE: COLPENSIONES
DEMANDADO: PEDRO ANTONIO MEDINA ALBA
DECISIÓN: SUSCITA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA

Corresponde al Despacho determinar si la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral y Seguridad Social tiene competencia para conocer la controversia planteada por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** en contra del señor **PEDRO ANTONIO MEDINA ALBA**.

ANTECEDENTES

La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES** promovió demanda medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del señor **PEDRO ANTONIO MEDINA ALBA**, con el objeto que se declare la nulidad de la Resolución SUB 15433 de 28 de enero de 2021 mediante la cual ordenó la reliquidación de pensión de vejez a favor del precitado.

Y a título de restablecimiento del derecho se ordene al demandado reintegrar el valor económico que resulte de las sumas recibidas, por concepto del reconocimiento y pago de una pensión de vejez hasta que se conceda la nulidad de la Resolución SUB 15433 de 28 de enero de 2021. Igualmente sean indexadas las sumas de dinero reconocidas, a favor de Colpensiones. Y, se condene al reconocimiento de intereses a los que hubiere lugar como consecuencia de los pagos efectuados al demandado por el reconocimiento pensional y se condene en costas.

Inicialmente la demanda fue repartida al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, Despacho que mediante auto del 04 de noviembre de 2021 declaró la falta de competencia para conocer la demanda formulada por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** en contra del



señor **PEDRO ANTONIO MEDINA ALBA**, y como consecuencia dispuso remitir las diligencias a los Juzgados Laborales del Circuito de Tunja¹.

Como sustento de la decisión indicó que efectuado el control de legalidad del libelo demandatorio determinó que el asunto sometido a estudio no es de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 consagra los asuntos que son del resorte de esta jurisdicción, dentro de los que se encuentran los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

Por su parte, el artículo 2º del CPTSS en su numeral 4º define que la jurisdicción Ordinaria Laboral conoce de asuntos relacionados a la prestación de los servicios de la seguridad social suscitados entre usuarios y entidades administradoras y prestadoras de dicho sistema, sin hacer distinciones que se hacen en el CPACA.

CONSIDERACIONES

Los numerales 4 y 5 del artículo 2 del C.P.L. determinan la cláusula general de competencia de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral y de Seguridad Social respecto de las controversias relacionadas con el Sistema de Seguridad Social. Específicamente el numeral 4 atribuyó al Juez Laboral el conocimiento de *“Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”*.

Adicionalmente, el numeral 5 asignó al Juez del Trabajo la competencia para *“La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”*

¹ Auto visto en el archivo 0008 del archivo



De manera pacífica la jurisprudencia de las Altas Cortes² ha dispuesto que la jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, tiene la competencia preferente y residual para conocer de las controversias que versen sobre asuntos de derecho laboral o referentes al sistema de seguridad social, luego la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo sólo serán competentes para conocer controversias que versen sobre estas materias si existe una regla o cláusula especial de competencia que les asigne el conocimiento de determinado tipo de conflictos.

La “acción de lesividad” es aquella mediante la cual la administración demanda la nulidad de los actos administrativos que ella misma ha proferido³. Esta acción es una “fórmula garantística”, en tanto permite a las entidades públicas someter sus propias decisiones a escrutinio judicial cuando no ha sido posible que éstas pierdan su fuerza ejecutoria por medio de la revocatoria directa, a pesar de “estar viciadas en su convencionalidad, constitucionalidad o legalidad”⁴.

Así las cosas, la acción de lesividad tiene como objeto:

- (i) proteger los “intereses propios de la administración”⁵ en aquellos eventos en los que los efectos del acto administrativo le resultan perjudiciales,
- (ii) salvaguardar el “ordenamiento jurídico superior”⁶; y

² **Consejo de Estado**, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia 1822-2020 de 2021. Allí se lee: “en cuanto a las reglas de competencia de la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, encontramos que el artículo 2.º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2.º de la Ley 712 y el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 o CGP, precisa que las controversias que se susciten entre los afiliados y beneficiarios con las entidades administradoras y prestadoras de los servicios de seguridad social, serán de competencia de la justicia ordinaria”. **Corte Suprema de Justicia**, Sala Plena, sentencia APL2642-2017 de 2017. Allí se lee: “[e]s cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º (...)”. **Corte Constitucional**, sentencias C-111 de 2000 y C-1027 de 2002.

³ Corte Constitucional, sentencia T-136 de 2019. “La acción de lesividad se entiende ejercida cuando la administración funge como demandante contra uno de los actos que ella misma profirió y contra la persona a la que van dirigidos los efectos jurídicos del acto atacado”. Ver también, Sentencia T-121 de 2016.

⁴ Corte Constitucional, T-139 de 2019.

⁵ Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Providencia 110010102000202000952 00 (17697-40) de 2020.

⁶ Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del diez (10) de julio de dos mil catorce (2014). C.P., Luis Artemo Cantillo Rojas. Ver también, Corte Constitucional, auto 316 del 17 de junio de 2021



(iii) evitar que las situaciones irregulares motivadas por los actos de la administración “puedan causar perjuicio al patrimonio público, los derechos subjetivos públicos o a los derechos e intereses colectivos”⁷.

Ahora, el artículo 97 del CPACA concordante con el inciso 1 del artículo 104 ibídem, asigna a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia exclusiva para conocer las acciones de lesividad⁸. Así, el artículo 97 dispone que los actos administrativos que hayan modificado *“una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría”*, no podrán ser revocados *“sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular”*. Por lo tanto, si la *“autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”*. El inciso 1º del artículo 104 ibídem, por su parte, establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer las controversias y litigios originados en actos administrativos *“sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas”*.

La Corte Constitucional en auto 316 de 2021 y el Consejo Superior de la Judicatura en providencia 17697-40 de 2020, sostienen que la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las acciones de lesividad incluso en aquellos eventos en los que la administración demanda actos que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social.

Dicha postura es explicada por la Corte Constitucional en auto 385 del 15 de julio de 2021, exponiendo tres razones principales, a saber:

“Primero, la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, en principio, no comprende la facultad de declarar la nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales o referentes a la seguridad social”⁹. El numeral 4º del artículo 2º del CPTSS

⁷ Ibídem

⁸ Corte Constitucional, sentencia T-136 de 2019. “La acción de lesividad se entiende ejercida cuando la administración funge como demandante contra uno de los actos que ella misma profirió y contra la persona a la que van dirigidos los efectos jurídicos del acto atacado”. Ver también, Sentencia T-121 de 2016.

⁹ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” Sentencia 1822-2020 de 2021. Allí se lee: “en cuanto a las reglas de competencia de la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, encontramos que el artículo 2.º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2.º de la Ley 712 y el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 o CGP, precisa que las controversias que se susciten entre los afiliados y beneficiarios con las entidades administradoras y prestadoras de los servicios de seguridad social, serán de competencia de la



dispone que los jueces laborales tienen competencia para conocer las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social, incluidas las que tiene origen en los actos administrativos. Sin embargo, **en aquellos eventos en los que se cuestiona un acto administrativo referente a la seguridad social, por regla general, la competencia de los jueces laborales se limita a verificar si dicho acto desconoció un derecho prestacional subjetivo del interesado, no tiene como objetivo verificar si el acto administrativo, en sí mismo considerado, contraviene la Constitución o la ley y, por esta razón, debe ser declarado nulo.**

Segundo, los artículos 97 y 104 del CPACA disponen **que la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer todas las acciones de lesividad contra actos administrativos que estén “sujetos al derecho administrativo”, con independencia de la materia sobre la que estos actos versen. Esto es así, dado que por medio de la acción de lesividad se debaten “intereses propios de la administración”¹⁰, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo.**

Tercero, la acción de lesividad “no tiene una naturaleza autónoma, lo que implica que para ejercerla se debe acudir a las acciones contenciosas de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho”¹¹. La competencia para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 138 del CPACA)” Negrilla fuera de texto.

Analizado el asunto objeto de debate, se tiene que la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - lesividad - en contra del señor **PEDRO ANTONIO MEDINA ALBA**, con el propósito que se declare la nulidad de la Resolución SUB 15433 de 28 de enero de 2021, acto administrativo mediante el que la demandante aparentemente incurrió en inexactitud al momento de reconocer y posteriormente reliquidar la mesada pensional al demandado, aumentando su valor de manera irregular y reconociendo un retroactivo pensional que le correspondía a Colpensiones. Y a título de restablecimiento del derecho se ordene al señor **PEDRO ANTONIO MEDINA ALBA** la devolución de la diferencia que resulte entre lo pagado equivocadamente y lo que en derecho le corresponda por concepto de pensión de vejez a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados hasta que se ordene la suspensión provisional o se declare la nulidad de los valores producto del reconocimiento ordenado.

justicia ordinaria”. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia APL2642-2017 de 2017. Allí se lee: “[e]s cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º (...)”.

¹⁰ Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, providencia 110010102000202000952 00 (17697-40) de 2020.,

¹¹ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia 0005-11 de 2016.



Así las cosas, atendiendo la jurisprudencia constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura resulta claro que a la controversia existente entre **COLPENSIONES** y el señor **PEDRO ANTONIO MEDINA ALBA** debe aplicarse la regla especial de competencia prevista en los artículos 97 y 104 del CPACA, en consecuencia, corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tramitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - lesividad, pues se reitera, la Jurisdicción Ordinaria Laboral en su especialidad Laboral y de la Seguridad social carece de competencia para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios, incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social, razón por la cual se suscitará el conflicto negativo de competencia, remitiendo las diligencias a la Corte Constitucional, para que en virtud de lo reglado en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política dirima la controversia planteada dado que los despachos entre los que se presenta el conflicto no corresponden a una misma jurisdicción.

En virtud de lo anterior se

R E S U E L V E

PRIMERO: SUSCITAR conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja y este Juzgado, por los argumentos expuestos en precedencia.

SEGUNDO: REMITIR de manera inmediata las diligencias a la **CORTE CONSTITUCIONAL**, para que en virtud de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política dirima el presente asunto.

TERCERO: COMUNICAR lo aquí decidido al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja. Por secretaría cúmplase.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia, conforme lo establecen los artículos 2 y 9 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020.




REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO
j04lctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co
TUNJA – BOYACÁ

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA LUCIA SÁENZ SAAVEDRA

JUEZ

MLSS/MCNC

	JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO
ESTADO No. 19	Publicado en el Micrositio de la Página de la Rama Judicial 10 DE JUNIO DE 2022

Firmado Por:

Martha Lucia Saenz Saavedra
Juez
Juzgado De Circuito
Laboral 004
Tunja - Boyaca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **be264df2bf3646e622268e285019274b65f2e63625852ac918cb036c68b43b09**

Documento generado en 09/06/2022 04:28:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>